

Amenaza militar a Bordaberry

● A principios de esta semana parecen crecer las dificultades entre el Presidente Bordaberry, del Uruguay, y las fuerzas militares del país: no se excluye que el Presidente sea depuesto o que tenga que aceptar una sumisión considerable al Ejército.

El problema es antiguo: en mayo de 1972, el Ejército conminó a Bordaberry a que destituyera a dos ministros, y le advirtieron que de no hacerlo así sería sustituido por una Junta de tres jefes militares. El Presidente obedeció. En junio de 1973, un año después, se produjo el llamado «golpe blando»: los militares forzaron al Presidente a disolver el Parlamento y prohibir los partidos políticos. Desde entonces el régimen se ha ido haciendo cada vez más rígido y duro para la oposición del interior.

El lunes de la semana pasada, los jefes militares del Ejército exigieron a Bordaberry la revocación de una medida gubernamental: la destitución del presidente del Instituto Nacional de Carnes. Los militares ordenaron directamente a los periódicos que no publicaran ninguna información sobre este problema, incluso si procedía de la Presidencia de la República, a menos que estuviese autorizada por ellos mismos.

El presidente del Instituto Nacional de Carnes había decidido conceder prioridad a los ganaderos pequeños y medios que no tuvieran más de 300 hectáreas de pastos; las facilidades serán principalmente las de concederles ventajas en el uso de las instalaciones frigoríficas para la comercialización de la carne. El presidente del Instituto estaba protegido por un alto jefe militar, el general Gregorio Alvarez. Ha denunciado éste a sus compañeros que el Presidente Bordaberry estaba subvencionado en este caso por los grandes ganaderos que luchan contra los pequeños y los medianos.

Pero el problema parece ser más profundo. Los jefes militares de Tierra y Aire y de las fuerzas de Policía han presentado una serie de reivindicaciones. Bordaberry no parece tener más salidas que las de ceder o dimitir. Se cree que si cae Bordaberry sería sustituido por un triunvirato formado por el comandante en jefe del Ejército de Tierra, teniente general Julio C. Vadora; el vicealmirante Víctor González Ibarcoyen y el brigadier del Aire Dante Paladini.

(Véase en las páginas 24-28 un reportaje sobre las condiciones sociales y políticas del Uruguay, por Carlos Trias Sagnier.)

AMERICA

Cuba y la OEA

● La Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Estados Americanos ha terminado en Washington con una decisión que va a significar el final oficial del aislamiento y bloqueo de Cuba: el 17 de mayo se acordó reformar los procedimientos de voto de manera que la mayoría simple decida las cuestiones en lugar de la absoluta de dos tercios exigida anteriormente. En la reunión pasada no se aceptó el levantamiento del embargo cubano porque los partidarios del final de las sanciones no consiguieron los dos tercios, pero sobrepasaron muy ampliamente la mayoría absoluta. En la reunión que se celebrará en julio, en Costa Rica, aplicando el nuevo procedimiento de votación, terminará el largo bloqueo impuesto a Cuba por los Estados Unidos (a menos de nuevas maniobras jurídi-

cas: las preparan activamente Uruguay, Chile y Paraguay, principalmente). Se entiende, de todas maneras, que los que han maniobrado para esta nueva situación son los propios Estados Unidos, que, en un alarde de irrealismo político, fueron los que lo impulsaron (consiguiendo así una radicalización de Cuba y abriendo las posibilidades a la mayor influencia de la URSS y otros países comunistas).

Otros acuerdos de la OEA: expresar los temores y molestias de todos los países del continente por las leyes comerciales de Estados Unidos, apoyar las reivindicaciones panameñas de la zona del canal (y urgiendo a que se celebren las conversaciones bilaterales Estados Unidos-Panamá) y la elección como secretario general del argentino Alejandro Orfila, no sin la inquietud de otros países como Brasil.

El «sí» puede ganar el referéndum sobre el MEC

● El próximo jueves 5 de junio, mediante su voto en el primer referéndum de la historia política del país, el electorado británico decidirá si Gran Bretaña permanece o no dentro del Mercado Común. Su voto se reducirá a un simple «sí» o «no» en contestación a la pregunta: «¿Desea usted que Gran Bretaña permanezca en la Comunidad Económica Europea?»

El referéndum, denunciado por los promercadistas como un instrumento político anticonstitucional en un sistema de democracia parlamentaria representativa, fue introducido en el manifiesto laborista de las últimas elecciones generales para calmar a la izquierda del partido, que había asumido una fuerza sin precedentes como consecuencia de las sucesivas confrontaciones entre los sindicatos y el gobierno de Heath en 1973 y 1974. Una vez aprobado en los Comunes por confortable mayoría, los «pro» y los «anti» se pusieron rápidamente en campaña, creando una serie de organizaciones partidistas y transpartidistas para predicar sus respectivos credos. Esto sucedió a principios de año. Mientras tanto, y a partir de abril de 1974, James Callaghan, el ministro de Asuntos Exteriores, junto con varios ministros más, renegociaba en Bruselas los términos de ingreso aceptados por Heath el 1 de enero de 1973, y declarados «inaceptables» por la entonces oposición laborista. La renegociación culminó en la conferencia de jefes de gobierno de la Comunidad, celebrada en Dublín el pasado 10 de marzo, y al término de la cual Harold Wilson declaró: «Creo que los objetivos de nuestra renegociación han sido sustancial, si bien no totalmente, alcanzados». Un mes más tarde la Cámara de los Comunes aprobaba, por 396 votos a favor y 170 en contra, los nuevos términos y, por ende, la permanencia en el Mercado.

Los nuevos términos —tachados de «insuficientes» por los «anti»— prevén: una mayor flexibilidad en la política agrícola común, que choca con el sistema tradicional británico de subsidios gubernamentales a los productos alimenticios; una disminución temporal del nivel de las contribuciones británicas al fondo común; una mayor libertad para aplicar las medidas tributarias, de política industrial y de desarrollo de las regiones más afectadas por el desempleo —Escocia, Gales y el Norte de Inglaterra— del modo que mejor le convenga al país y, en fin, términos más favorables para la continuación del comercio con la Commonwealth. El gobierno recomen-

dó los nuevos términos al electorado.

Dentro del gobierno, sin embargo, cinco ministros del gabinete, encabezados por Anthony Wedgwood Benn, a cargo de la cartera de Industria, y liberados por Harold Wilson de la responsabilidad ministerial colectiva, que sigue rigiendo en todos los demás sectores, hacen campaña por sacar al Reino Unido de la Comunidad.

La alineación de fuerzas, claramente definida desde el principio, se presenta en los siguientes términos: a) dentro del gobierno: mayoría abrumadora de «pro», encabezados por Wilson y Roy Jenkins, actual ministro del Interior y eterno proeuropeista; b) en la Cámara: dos tercios de los diputados laboristas (centro y centro derecha), cuatro quintas partes de los conservadores (derecha, centro e izquierda del partido) y los liberales, a favor de la permanencia; en contra: la extrema derecha de los conservadores, el ala izquierda del laborismo (con algún que otro centrista), los nacionalistas escoceses y galeses y el grupo de Irlanda del Norte, bajo la batuta del maquiavélico ex conservador Enoch Powell, y c) fuera de la Cámara: aquí el partido conservador mantiene una mayoría «pro». Pero el laborismo, en cambio, se ha manifestado abiertamente «anti» (en la reciente plenaria especial del partido, de los 46 sindicatos que componen el grueso del movimiento laborista, sólo siete votaron a favor del Mercado). Los demás partidos siguen la línea de sus representantes en la Cámara.

Las dos principales organizaciones transpartidistas creadas para esta campaña ofrecen al país el inusitado espectáculo de ver a eternos rivales políticos defendiendo la misma causa ante las cámaras de televisión: Michael Foot, ministro de Empleo, y Wedgwood Benn, paladines de la izquierda laborista, unen sus voces a las de Enoch Powell y algún que otro general retirado para denunciar la perversión de los burócratas de Bruselas. En el programa siguiente, Edward Heath, Roy Jenkins y Jeremy Thorpe (el líder liberal) hacen la apología de la causa europeísta. ¿Quién tiene mayores probabilidades de vencer al electorado?

Ambos bandos esgrimen argumentos de peso. Los «anti» parten de la premisa general que la permanencia en la Comunidad Europea ha significado ya y significará con mucha más intensidad en el futuro una pérdida sustancial de la soberanía. Esa pérdida de soberanía se traduce: en la imposibilidad de importar alimentos ▶